

Radicado: 05001-31-05-014-2020-00355-01
Radicado Interno: P0492323
Asunto: Confirma sentencia

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°089

Medellín, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **NORA MEJÍA DE ZAPATA** contra **PROTECCIÓN S.A.**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se condene a **Protección S.A.** a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de su hijo **Diego Fernando Zapata Mejía** y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indicó que el joven **Diego Fernando Zapata Mejía** se encontraba afiliado a **Protección S.A.** y falleció el **3 de diciembre de 2008**.

El causante vivía con su madre y cubría los gastos como alimentación y servicios públicos.

Luego de la muerte del joven **Zapata Mejía**, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes la cual le fue negada por no acreditar el requisito de dependencia económica.

Contestación Protección S.A.

La AFP demandada a través de apoderada dio respuesta indicando que es cierto que el causante fue su afiliado y dejó causado los requisitos para que sus potenciales beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes.

Esta prestación fue reclamada por la madre del afiliado como beneficiario, no obstante, no cumplió con el requisito de dependencia económica exigido por la Ley 797 de 2003, conforme se pudo verificar en investigación adelantada por esa administradora de pensiones, en la que se determinó que la demandante tenía un inmueble propio y estaba cubierta en salud por su ex cónyuge.

En ese sentido destacó que luego de la muerte del causante la actora recibió ingresos mensuales de \$600.000 por arrendamiento de un bien inmueble de su propiedad y \$100.000 de colaboración de parte de su hija.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones:

Sentencia de primera instancia

El Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **1 de marzo de 2013**, condenó a **Protección S.A.** a reconocer la pensión de sobrevivientes en favor de la señora **Nora Mejía de Zapata** a partir del **3 de diciembre de 2018** en cuantía de 1 SMMLV a razón de 13 mesadas por anualidad.

Así mismo, condenó a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 19 de agosto de 2019. Del valor de las mesadas autorizó a la administradora a descontar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Como fundamento de su decisión indicó que toda la prueba traída al proceso conduce con lógica a establecer que la demandante dependía económicamente de su hijo, en ese sentido destaca que desde la misma investigación adelantada por **Protección S.A.** para determinar la procedencia de la pensión de

sobrevivientes resulta evidente que la actora no contaba con medios económicos para sus sostenimiento, situación corroborada con la testimonial traída al proceso, por lo que en este sentido calificó de inexplicable la negativa de la AFP, pues revelándose contra la prueba recaudada por ella misma resolvió negar la pensión de sobrevivientes sin fundamento factico o legal plausible.

Esta decisión fue apelada por el apoderado de la AFP demandada en los siguientes términos generales:

Recurso de apelación Protección S.A.

El apoderado recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia por cuanto a su juicio no se demostró que la madre de la causante dependiera económicamente de esté a la fecha de la muerte.

Lo anterior, por cuanto en investigación adelantada por esa entidad se pudo determinar que recibía ingresos mensuales por un arrendamiento y recibe ayuda de otras personas, por lo que es claro que no dependía del causante.

Adicional a ello debe absolverse del reconocimiento de intereses moratorios, por cuanto Protección al momento de negar el derecho pensional lo hizo sustentado en razones objetivas.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, la apoderada de la AFP demandada solicitó que se **revoque** la decisión de primera instancia teniendo en cuenta que la actora no demostró la dependencia económica del causante, toda vez que, en la investigación administrativa contratada con Decrim Lawyer Group S.A.S. se demostró que la solicitante tenía independencia económica derivada de los frutos civiles que recibía del arrendamiento de un inmueble.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia de conformidad con los recursos de apelación interpuesto, será: (i) Determinar si la señora **Nora Mejía de Zapata** probó la dependencia económica respecto su hijo fallecido para

acceder a la pensión de sobrevivientes y (ii) Determinar si proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. El señor **Diego Fernando Zapata Mejía** fue hijo de los señores **Nora Mejía** y **Luis Fernando Zapata Montoya** (02/pág.45).
2. El señor **Zapata Mejía** falleció el día **3 de diciembre de 2018** (02/pág.46), en vigencia de la Ley 797 de 2003.
3. El día **18 de junio de 2019**, la señora **Nora Mejía Zapata** solicitó el reconocimiento de la pensión sobrevivientes generada con ocasión del fallecimiento de su hijo el afiliado **Diego Fernando Zapata Mejía** (02/págs.35-37).
4. En formato para investigación de dependencia económica diligenciado el 7 de julio de 2019, la demandante indicó que su hijo tenía unos ingresos mensuales de \$800.000, de los cuales \$650.000 eran dedicados a gastos familiares (del grupo integrado por el causante y la demandante) consistentes en: alimentación \$300.000, servicios públicos: \$200.000 y otros egresos \$150.000 y que en vida de su hijo no contaba con ingresos propios y no recibía colaboración económica de otras personas (02/págs.11-15).
5. La veracidad de esta información fue corroborada por Decrim Lawyers Group S.A.S., quien como tercero contratado por **Protección S.A.** adelantó entrevistas con la demandante en la que al diligenciar cuales eran sus ingresos después de la muerte de su hijo indicó: \$600.000 arrendamiento y \$100.000 de aportes de hijo –no fijo- e indicó que sus egresos eran de \$550.000 de arrendamiento, \$100.000 de alimentación y \$200.000 de servicios públicos (02/págs.16-22).
6. Así mismo, se entrevistó a **Luis Fernando Zapata Montoya** padre del causante, quien indicó que su hijo siempre vivió con la mamá, que él se separó de su cónyuge en el año 2010 y desde ese momento no les colaboraba en nada, por lo que fue su hijo quien asumió las obligaciones del hogar y el sustento de su madre, no pagaban arriendo porque vivían

en una casa propia. Informa que en su caso es pensionado por lo que no está solicitando la pensión y que mantuvo a su ex cónyuge afiliada en salud por que se encontraba con tratamientos pendientes, finaliza manifestando: “...espero que esta pensión sea para Nora Mejía, la madre, ya que no tiene de que vivir, ya que dependía de su hijo” (02/págs.23-24).

7. Como conclusión de la investigación adelantada se indicó: “*A fecha del siniestro el causante laboraba en la estación de servicio la estrella, adicional vendía ropa y gorras con el fin de solventar las obligaciones del hogar y responder económicamente por la reclamante*” (02/págs.29-34).
8. En comunicación del **1 de agosto de 2019, Protección S.A.** informó a la actora que no resultaba procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, toda vez que no se demostró la dependencia económica, esto por cuanto: “*...fue posible comprobar que sin el aporte del afiliado, los padres pueden subsistir sin ser vulnerado el mínimo esencial*” (02/pág.35).
9. Mediante declaración juramentada presentada ante Notario, el señor **Luis Fernando Zapata Montoya** padre del causante, manifestó que no le interesaba intervenir en la reclamación de la eventual prestación pensional derivada de la muerte de su hijo, toda vez que no dependía económicamente de él (02/pág.10).

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta al problema jurídico propuesto:

De la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

- d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.

De la lectura de este artículo resulta claro que los padres cuando pretendan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, deben

demostrar la dependencia económica del causante para el momento del fallecimiento, siendo necesario precisar que de conformidad con lo enseñado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la dependencia “...*debe establecerse al momento de la muerte del trabajador y no con base en hechos o situaciones...*” (15 feb. 2006, rad.26563).

Lo anterior es de fundamental relevancia, puesto que, en el caso de autos, **Protección S.A.** en su comunicado de negación de la pensión de sobrevivientes sustentó su decisión en que “...*fue posible comprobar que sin el aporte del afiliado, los padres pueden subsistir sin ser vulnerado el mínimo esencial*” (02/pág.35), sin embargo, tal afirmación desconoció la investigación que la propia AFP demandada contrató con Decrim Lawyers Group S.A.S. para determinar la existencia dependencia económica, misma en la que con claridad se determinó que la madre dependía del afiliado y donde se dijo de las condiciones económicas después de la muerte, lo siguiente: “*Con posterioridad del siniestro la reclamante decide cambiar de residencia, solventa la cuota de arrendamiento con los frutos civiles que recibe del inmueble familiar. Reside sola desde la fecha del siniestro. Recibe algunas colaboraciones familiares*” (02/pág.34).

Es quizás este último aparte del que se sirve la AFP para sustentar su negación, pero en tal intelección aparta ese párrafo de su contexto y sentido lógico y es que la madre que siempre tuvo garantizada su vivienda, cambio la misma por otra y luego de la muerte de su hijo para cubrir su alimentación y el pago de servicios públicos que en vida solventó **Diego Fernando Zapata Mejía** debió acudir a la caridad de familiares y amigos, aspecto que lejos de dar cuenta de una autosuficiencia muestra una dependencia de un carácter significativo de la contribución y una evidente lesión de sus condiciones de vida, su ingreso mínimo vital y su dignidad.

En ese sentido al ser de una claridad incontrovertible el resultado de la investigación, los testimonios traídos al proceso pasaron a ser una comprobación de lo ya sabido y múltiples veces repetido **Diego Fernando Zapata Mejía** era en el encargado del sostenimiento económico de su madre, contribución que fue cierta, periódica y significativa, por cuanto desde el año 2010 que su padre abandonó el hogar, era el encargado de proveerle a su madre la alimentación, pago de servicios públicos y otros gastos, de tal forma que la negativa de la prestación por parte de **Protección S.A.** resulta infundada y caprichosa.

Es por lo anterior que se **confirmará** la decisión de primera instancia, haciendo un llamado a la administradora de pensiones para que en el futuro se abstenga de negar derechos prestaciones sin fundamento alguno, sometiendo a los beneficiarios de los afiliados a acudir a la jurisdicción para reclamar derechos cuya certeza incluso fue comprobada en desarrollo de investigación administrativa.

De la procedencia de la condena al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Se solicita por parte del apoderado de la AFP demandada que no se imponga el pago de intereses moratorios, toda vez que, la negativa del derecho se fundamentó en razones sólidas y objetivas.

En lo referente a esta manifestación debe recordar la Sala que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tienen como propósito resarcir al pensionado por el retardo en el pago de la prestación y en tal sentido tiene carácter objetivo pues se debe tener en cuenta para su imposición el retardo en que incurrió la administradora de pensiones.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha explicado que existen circunstancias particulares en las cuales no proceden los intereses, a saber: i) cuando existe disputa entre los beneficiarios, ii) la negativa es producto de la interpretación objetiva de la ley vigente y iii) la pensión es reconocida producto de un cambio jurisprudencial.

Una vez revisado el caso sometido a estudio no se advierte que la administradora se encuentre dentro de alguno de los supuestos enlistados, por el contrario, su negativa se sustenta en que a partir de la conclusión obtenida en su investigación determinó que no existía dependencia económica, tesis que fue desvirtuada en desarrollo del presente proceso.

En este punto se debe señalar que la negativa de la prestación fundada en el no cumplimiento de requisito de dependencia no es un elemento por el cual se pueda generar una exoneración del pago de intereses, máxime cuanto la conclusión entregada por la entidad a la que se encargó la investigación fue clara al indicar “...A la fecha del siniestro el causante laboraba en la estación de servicio la estrella, adicional vendía ropa y gorras con el fin de solventar las obligaciones del hogar y responder económicamente por la reclamante” (02/págs.29-34), sin embargo, de forma inexplicable **Protección S.A.** desconociendo esta manifestación y sin presentar elementos de prueba

adicional resolvió negar la prestación aduciendo la falta de dependencia económica, debiendo en este sentido recordar lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL-843-2021, en la que al respecto indicó:

Lo adocinado en las providencias que sirven de sustento argumentativo al recurrente, contrario a lo manifestado por éste, nos enseñan, que la buena o mala fe o las circunstancias particulares que condujeron a la discusión del derecho pensional, no pueden ser consideradas para establecer la procedencia de los intereses moratorios de que trata el precepto bajo análisis, tal como se indicó en sentencias como la CSJ, SL 23 sep. 2002, rad. 18512, SL 29 may. 2003, rad. 18789, SL 13 jun. 2012, rad. 42783, entre otras; pues no se concibe como un acto liberatorio de tales réditos, la negativa de la prestación pensional por el simple hecho de existir un motivo de duda sobre el surgimiento del derecho por parte de la administradora pensional, menos aún, fincada en la acreditación fáctica de la dependencia económica, como se esgrime y lo sustenta en el cargo la entidad demandada, o por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales previamente desarrollados por los jueces competentes frente a la materia en discusión, como se verificó en el presente caso.

De manera que en ningún desafuero incurrió el sentenciador, cuando en aplicación del artículo 141 de la Ley de Seguridad Social, y ante la tardanza en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la condenó por dicho concepto.

Así las cosas, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia al imponer el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por lo que se **confirmará** el fallo apelado.

Costas

Costas en esta instancia a cargo de **Protección S.A.** por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. Las agencias en esta instancia a cargo de la entidad demandada y en favor de la demandante se fijan en la suma de **\$4'640.000**.

Decisión

Radicado: 05001-31-05-014-2020-00355-01
Radicado Interno: P0492323
Asunto: Confirma sentencia

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día **1 de marzo de 2013**, en el proceso ordinario adelantado la señora **NORA MEJÍA DE ZAPATA** contra **PROTECCIÓN S.A.**

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A.** Las agencias en esta instancia a cargo de la entidad demandada y en favor de la demandante se fijan en la suma de **\$4'640.000.**

La anterior decisión se notifica por **EDICTO.**

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado: 05001-31-05-014-2020-00355-01
Radicado Interno: P0492323
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante (s)	Nora Mejía de Zapata
Demandado	Protección S.A.
Radicado	05001-31-05-014-2020-00355-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona


El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 25 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 25 de mayo de 2023 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO